

nal de la Iglesia. En definitiva obliga a plantearse la naturaleza de la potestad eclesiástica, y en concreto de la potestad legislativa, cuestión que excede —a mi parecer— ampliamente la exégesis de las normas codiciales y disposiciones postconciliares. Aunque realizado con rigor y meticulosidad, se nota la falta de un planteamiento más radical que —entiendo— es el adecuado para resolver los problemas del legislador y la legislación particular.

JOSE M. GONZALEZ DEL VALLE

## EXECUTIO POTESTATIS

ADAM ZIRKEL, «*Executio Potestatis*». *Zur Lehre Gratians von der geistlichen Gewalt*, München Theologische Studien. III Kanonistische Abteilung. 33 Band, 1 vol. de 190 págs., Ed. Eos Verlag, St. Ottilien, 1975.

Esta obra intenta estudiar la doctrina de Graciano sobre la potestad sagrada. En la introducción, el autor comienza por plantear el estado de la cuestión sobre la naturaleza y el origen del poder en la Iglesia. Después de recordar que la potestad de los titulares de oficios eclesiásticos consiste en poder de orden y poder de jurisdicción y que su naturaleza es todavía problemática, el autor se pregunta cómo se relacionan entre sí los dos poderes y con el poder sagrado de la Iglesia.

Cita entonces la doctrina del can. 109 del CIC según el cual el poder de orden se confiere por la sagrada ordenación mientras el poder de jurisdicción lo es por la misión canónica, excepto en el caso del Pontificado Supremo. A propósito de esta doctrina se pregunta, cómo puede determinarse un poder en su naturaleza específica sólo a través del modo de colación.

Recuerda después una concepción bastante generalizada, según la cual los dos poderes se distinguen por su objeto. El poder de orden capacita para la administración de sacramentos y otros actos consecratorios, mientras el poder de jurisdicción capacita para la realización de actos jurisdiccionales. De este modo —dice el autor, preguntándose con qué derecho y fundamento— la actividad magisterial del poder de jurisdicción no se coordina con el poder de orden, aunque se tenga conciencia de la problemática de esta coordinación. Se interroga entonces, cómo puede comprenderse que el poder de jurisdicción y el poder de magisterio sean conferidos a través de un acto no sacramental. ¿Será la actuación de este poder menos espiritual, dependerá menos de la asistencia del Espíritu que la administración de sacramentos?

Quién recibió el poder de orden —en contraposición con el poder de jurisdicción— puede siempre ejercitarlo válidamente, aunque no siempre lícitamen-

te, incluso en el caso de encontrarse fuera de la comunión de la Iglesia, según la opinión generalizada de los autores. Pero, ¿cómo puede conciliarse esta posición con la realidad histórica, que en la edad media durante siglos consideraba inválidas las ordenaciones no canónicas recibidas fuera de la Iglesia, como resulta de las reordenaciones? ¿Cómo se puede armonizar esto con la doctrina que sostiene que todos los sacramentos son sacramentos de la Iglesia y originan o intensifican en el que los recibe una relación con la Iglesia? ¿Cómo puede crearse una relación tal a través de un titular de oficio, que se encuentra fuera de la comunión con la Iglesia? ¿Por qué sólo en el caso del sacramento de la Penitencia —y no en los demás sacramentos— está dependiendo la validez de este acto del poder de orden de la posesión de la «jurisdicción»? ¿Se responderá cabalmente a esta cuestión diciendo que la absolución sacramental es un acto judicial?

Tras haber planteado toda esta problemática, el autor invoca el texto del n.º 21 de la Constitución *Lumen Gentium* según el cual la consagración episcopal confiere también junto con el *munus sanctificandi*, el *munus decendi et regendi*. En este texto ve el autor la enseñanza del Concilio sobre la fundamentación sacramental de la potestad sagrada. Añade que el mismo Concilio enseña que el *munus regendi et docendi* —y la doctrina común dice lo mismo del *munus sanctificandi*— sólo se pueden ejercer en comunión con la Cabeza y los miembros del Colegio Episcopal. Esta doctrina lleva al autor a plantearse una última cuestión: ¿un obispo, al cual falta la comunión jerárquica, y, por consiguiente, la posibilidad de ejercer válidamente el *munus regendi*, aunque retenga el poder radical sacramental para eso, podrá siempre real y necesariamente ejercer válidamente el *munus sanctificandi* y, administrar por tanto todos los sacramentos, incluso el de la Penitencia?

En la presente obra el autor intenta dar una contestación a la cuestión planteada, estudiando la doctrina de Graciano sobre el poder sagrado. Divide su estudio en un capítulo sobre la respuesta contradictoria de Graciano, y una conclusión en que explica el motivo de la contradicción y la tentativa de una solución.

Graciano se ocupa de la cuestión de la validez de la ordenación o de la administración de otros sacramentos por parte de un hereje, de modo particular en la Causa 1, sobre todo en la *Quaestio* 1 y en la 7. En la *Causa* 9 *Quaestio* 1 se trata de saber si un obispo excomulgado puede ordenar válidamente. En la *Causa* 24 *Quaestio* 1 se investiga si un obispo caído en herejía puede infringir la excomunión a través de la Penitencia. En este contexto Graciano discute también la administración «extraeclesial» de otros sacramentos. Además hay otros tres lugares donde más o menos se ocupa de la problemática en cuestión: *Distinctio* 32, *Causa* 16 *Quaestio* 1 y *Distinctio* 4 de *Consecratione*.

El autor estudia todos estos lugares de Graciano. Su conclusión es que Graciano, prescindiendo del caso del Bautismo, enseña, en muchos lugares, la validez, en otros la invalidez de los sacramentos administrados «fuera de la Iglesia». La doctrina contradictoria refleja la diversidad de opiniones entre los canonistas y teólogos de la alta escolástica. Esto lleva al autor a pensar que la Iglesia en el decurso de su historia y en sus diversas iglesias particulares no ha mantenido una actitud única en cuanto a la administración de los sacramentos «fuera de la Iglesia». Esta diversidad de la praxis y de la doctrina, así como la contradicción de las afirmaciones de Graciano ¿podrán explicarse por el hecho de que la Iglesia en un determinado ámbito puede determinar, a su discreción, si el poder conferido a través de la ordenación puede ser ejercido válidamente o no, y por eso los sacramentos «extra eclesiales» son válidos o inválidos? Según el autor, la lista de testimonios de la tradición recogidos por él parecen ser favorables a este poder de la Iglesia.

Tras haber estudiado cuidadosamente los textos de Graciano y los testimonios de la tradición, el autor se limita a concluir en una nota final que los autores del siglo XX que estudia se interrogan si será necesaria la jurisdicción para la ejecución de la potestad de orden. La expresión **executio potestatis** —título de la investigación que analizamos— se encuentra en Graciano. Del estudio de los textos de Graciano concluye nuestro autor que el titular del oficio eclesiástico para el ejercicio del poder recibido por la ordenación necesita todavía de un poder, a través de cuya colación o privación este ejercicio está vinculado a la comunidad de la Iglesia. De todos modos necesita de él para el ejercicio lícito y —si la Iglesia así lo quiere— también para el ejercicio válido. Graciano denominó a este poder, de manera un tanto equívoca, «executio»; pues él da al poder el nombre del acto. Aparentemente él teme, más o menos inconscientemente, declarar abiertamente la opinión —que aparece en sus textos— de que para ejercer el poder recibido por la ordenación es necesario todavía un poder. Sin embargo esta aparente paradoja está fundamentada en la naturaleza del tema; el «segundo» poder es necesario para que el ejercicio del poder recibido a través de la ordenación permanezca vinculado a la comunidad eclesial. Hoy nosotros denominamos este poder «potestas iurisdictionis», por lo menos en cuanto es necesario para la administración del sacramento de la Penitencia. Esta expresión es exacta en la medida en que la realidad así designada es una verdadera «potestas». Sin embargo es equívoco el genitivo añadido, en cuanto podría dar la impresión y —como indica un uso difundido— de hecho da la impresión, de que se trata de un poder, que habilita para la **dirección**. Sin embargo el genitivo no indica —tal como en «potestas ordinis»— el **objeto**, sino el **origen** del poder. «Potestas iurisdictionis» es aquel poder, del cual tiene necesidad el titular ordenado de un oficio de la Iglesia por parte de la competente autoridad eclesiástica, para poder

ejercer su poder, recibido a través de la ordenación. Este «segundo» poder —según la disciplina vigente— es concedido tácitamente con la ordenación —no a través de ella— o conferido a través de un acto propio, como ocurre hoy día en el sacramento de la Penitencia. El es, como decía Graciano, la «executio potestatis» o, como también se podría decir, la «potestas executionis».

Como se ve, el autor, aunque en la introducción parecía querer tratar del tema de la naturaleza y origen del poder en la Iglesia, se limita a estudiar un aspecto de la llamada potestad de orden: la licencia que la competente autoridad de la Iglesia exige para el ejercicio legítimo o incluso válido del **munus sanctificandi** recibido a través de la ordenación. Nos parece que el término «potestas», en su estricto sentido jurídico, se debería reservar para la función calificada de la función de gobierno que supone una relación superior-súbdito y se expresa a través de actos de imperio. Seguir hablando de «potestas» cuando se trata de los **munera** recibidos a través de la ordenación o del **munus docendi**, nos parece que es trasladar un lenguaje teológico al ámbito del derecho, que lleva a identificar todas las relaciones jurídicas surgidas del ejercicio de los **munera** como relaciones de poder.

La investigación de Zirkel se caracteriza por su rigor científico, por lo que nos congratulamos con el autor.

JOSE A. MARQUES

## CODIGO DE DERECHO CANONICO

LORENZO MIGUELEZ DOMINGUEZ - SABINO ALONSO MORAN - MARCELINO CABREROS DE ANTA, **Código de Derecho Canónico**, 1 vol. de XXXII+648 págs., Biblioteca de Autores Cristianos, Ed. Editorial Católica, S. A., Madrid, 1975.

Casi a los sesenta años de la primera edición del **Código** en el vol. IX, pars. II, 28 de junio de 1917, de **Acta Apostolicae Sedis**, la B.A.C. incluye en su amplia e importante colección de las Ciencias Sagradas esta nueva versión castellana del **Código de Derecho Canónico**.

Por ser la obra objeto de comentario, una publicación redactada por prestigiosos canonistas y avalada por diez ediciones (1.ª ed., Madrid 1945; 10.ª ed., Madrid 1975) en su versión bilingüe, todo esfuerzo para su presentación sería innecesario y quizás inoportuno. Por ello nos limitaremos a reseñar brevemente las novedades que presenta esta edición, en la que como es lógico los cánones aparecen puestos al día en re-